

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real Decreto por el que se establecen medidas para garantizar la trazabilidad de los subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

I

El Proyecto sometido a informe tiene por objeto, conforme indica su artículo 1 el establecimiento de instrumentos para la adecuada gestión de los subproductos de origen animal no destinados al consumo humano ("SANDACH") y su trazabilidad, creando un registro de establecimientos y de transportistas, así como la información básica que deben incluir los documentos comerciales que ha de acompañar el transporte y movimiento de estos subproductos.

A tal efecto, el artículo 2 j) del Proyecto define los establecimientos SANDACH como los locales que necesiten de ser registrados y/o autorizados conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1774/2002, haciendo igualmente referencia a los conceptos de Documento comercial, por referencia al propio Reglamento citado y transportista SANDACH.

II

El artículo 3 crea el Registro General de establecimientos SANDACH, de carácter público e informativo, "sin perjuicio de los límites que legalmente corresponden para la protección de datos de carácter personal", que contendrá los datos incluidos en el Anexo I, que serán comunicados al Registro por las Comunidades Autónomas competentes, que tendrán igualmente acceso al registro "para actualizar la información que les compete e inscribirán en el mismo los establecimientos, usuarios finales y centros de recogida SANDACH ubicados en su territorio que obtengan autorización según el reglamento 1774/2002.

En el Anexo I se señalan como se ha indicado los datos contenidos en el registro, referidos al establecimiento mismo con la única excepción de su titular, “cuyos datos se protegerán conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999”, siendo dichos datos los referidos a sus apellidos, nombre o razón social y su NIF o CIF.

La inclusión de los datos en el registro constituye un tratamiento de datos de carácter personal que deberá respetar lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”.

En este sentido, el artículo 6.4 del reglamento 1774/2002, de continua referencia, dispone que “Cada Estado miembro elaborará una lista de las plantas autorizadas dentro de su propio territorio conforme al presente Reglamento. Cada una de ellas recibirá un número oficial que servirá para identificar a la planta en relación con la naturaleza de sus actividades. Los Estados miembros remitirán copias de sus listas y de las correspondientes versiones actualizadas a los demás Estados miembros y a la Comisión”.

A tal efecto, el Reglamento 1192/2006, de 4 de agosto, establece las normas de aplicación por lo que se refiere a las listas de plantas autorizadas, disponiendo el apartado 2 e) de su Anexo que “Cada Estado miembro proporcionará a la Comisión una dirección de enlace a un único sitio web nacional que contendrá la lista de referencia de las listas de todas las plantas autorizadas en su territorio («la lista de referencia»)”.

Si bien no se establece ninguna previsión específica al respecto, de las normas citadas se deriva que la publicidad que habrá de darse podrá ir referida exclusivamente a los propios establecimientos, sin incluir datos de carácter personal de los titulares de los mismos, de forma que en lo que se refiere a esa publicidad no serían aplicables las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999.

Ello se ratificaría por el hecho de que la propia norma sometida a informe se remite a la Ley Orgánica 15/1999 en lo referido a “los límites” aplicables a la publicidad de la información.

Por este motivo, la recogida de los datos aparecería fundada en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 en relación con las normas comunitarias que se han reproducido con anterioridad, si bien la publicidad del registro no se referirá a datos de carácter personal, al no ser precisa en el marco contenido en las mencionadas normas.

Por este motivo, sería conveniente indicar en el Proyecto que el registro “tendrá carácter público e informativo, **si bien no se harán públicos los datos**

de carácter personal de las personas físicas titulares de los establecimientos”.

En cuanto al intercambio de información entre el Estado y la Comunidades Autónomas, que por una parte nutrirán el Registro y por otra incorporarán los datos resultantes de su actuación, la misma aparecería amparada por el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos”.

En este sentido, señala el artículo 10.4 c) del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que será posible la cesión de datos entre Administraciones Públicas sin contar con el consentimiento del interesado cuando “La comunicación se realice para el ejercicio de competencias idénticas o que versen sobre las mismas materias”.

III

El artículo 4 crea el registro General de Transportistas SANDACH, en que se incluyen los datos obrantes en los registros autonómicos relativos a dichos transportistas, teniendo igualmente carácter público e informativo, “sin perjuicio de los límites que legalmente corresponden para la protección de datos de carácter personal, previéndose un intercambio de información entre el Estado y las Comunidades Autónomas similar al del Registro de establecimientos SANDACH ya analizado.

El registro incorporará los datos contenidos en el Anexo II, entre los que se encontrarán los datos referidos al titular de la empresa y de las delegaciones de la misma si las tuviera.

A diferencia de lo que sucede en el supuesto del registro de establecimientos el Reglamento 1774/2002 no establece una norma específica referida a la creación de un registro de transportistas de los subproductos a los que se refiere el Proyecto, por lo que no resulta posible, sin más considerar que el tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en el Anexo II del mismo se encuentra amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

Por este motivo, sería preciso que la existencia del mencionado Registro pudiera encontrar amparo en lo previsto en alguna norma interna con rango de Ley o del derecho comunitario que pudiese justificar la existencia, pudiendo

ser suficiente a tal efecto el establecimiento de un régimen de autorización para el traslado de los subproductos objeto de regulación por el Proyecto.

En este sentido, debe recordarse que el artículo 10.2 a) del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 aclara el significado de la habilitación legal a la que se refieren los artículos 6.1 y 11.2 a) de la Ley Orgánica, en el sentido de indicar que será posible el tratamiento y cesión de datos sin contar con el consentimiento del interesado cuando “Lo autorice una norma con rango de Ley o una norma de derecho comunitario y, en particular, cuando concurra uno de los supuestos siguientes:

- El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
- El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas”.

De este modo, no será precisa la existencia de una habilitación legal expresa para la creación del Registro sino que será suficiente que la creación del mismo pueda derivarse directamente de lo establecido en la Ley o en una norma comunitaria, de forma que sólo procediendo a la creación del registro pueda efectivamente darse cumplimiento pleno a tal disposición.

En caso de no existir tal disposición, sería preciso para recabar los datos de las personas físicas a las que se refiere el Proyecto contar con el consentimiento del propio interesado.

Siempre que concurra la fundamentación legal suficiente para justificar el tratamiento de los datos, bien por existir una base legal en los términos que se han indicado, bien por contarse con el consentimiento del afectado, el intercambio de información entre el Estado y las Comunidades Autónomas se encontrará amparado por los artículos 21.1 de la Ley y 10.4 c) del reglamento, en los términos que ya se indicaron.

En todo caso, en cuanto a la publicidad del registro, sería preciso introducir una aclaración similar a la que se indicó para el registro de establecimientos, en el sentido de que el Registro “tendrá carácter público e informativo, **si bien no se harán públicos los datos de carácter personal de las personas físicas titulares de los establecimientos o de sus delegaciones**”.

En consecuencia, al no haber podido esta Agencia Española de Protección de Datos identificar la norma con rango de Ley o de derecho

comunitario habilitante de la existencia del registro general de transportistas, **habrá de estarse a lo que se ha indicado en este apartado, siendo necesario, a falta de dicha cobertura legal, contar con el consentimiento del interesado.**

IV

Finalmente, el Proyecto regula el movimiento de los subproductos y productos derivados, imponiendo al titular del establecimiento la obligación de que dicho movimiento conste documentado, en los términos previstos en el Anexo III, conservando igualmente la documentación relativa al movimiento producido.

El Anexo II del Reglamento 1774/2002, objeto de múltiples reformas posteriores, regula las normas de higiene aplicables a la recogida y el transporte de subproductos animales y productos animales transformados, imponiendo la llevanza de los documentos de acompañamiento a los que se refiere el Proyecto en su Anexo III, por lo que su creación se encuentra amparada por la obligación impuesta en dicho reglamento.

Asimismo, el artículo 9.1 del Reglamento dispone que “Toda persona que envíe, transporte o reciba subproductos animales llevará un registro de los envíos. Los registros incluirán la información especificada en el anexo II y serán conservados durante el período prescrito en el mismo”.

De este modo el tratamiento de datos llevado a cabo por el titular del establecimiento se encontrará amparado por el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 en relación con el transcrito artículo 9.1 del reglamento 1774/2002.